



América Latina Hoy

ISSN: 1130-2887

latinohoy@usal.es

Universidad de Salamanca

España

Levine, Daniel; Romero, Catalina
Movimientos urbanos y desempoderamiento en Perú y Venezuela
América Latina Hoy, núm. 36, abril, 2004, pp. 47-77
Universidad de Salamanca
Salamanca, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30803603>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

MOVIMIENTOS URBANOS EN PERÚ Y VENEZUELA *Urban movements and discourses*

Daniel LEVINE y Catalina ROMERO
Universidad de Michigan / Pontificia Universidad Católica de Perú
✉ dhldylan@umich.edu
✉ jromero@pucp.edu.pe

BIBLID [1130-2887 (2004) 36, 47-77]
Fecha de recepción: noviembre del 2003
Fecha de aceptación y versión final: febrero

RESUMEN: Este artículo plantea la continuada violencia acompañada de daños? ¿Por qué los movimientos sociales continúan siendo un factor de consideración del asunto encuentran, de la movilización, del empoderamiento de Venezuela y Perú. Después de analizar la política en nuestros dos casos de ese proceso, y sobre la peculiaridad de muchos movimientos contemporáneos en sus vínculos con los partidos políticos, muy importantes en este contexto de urbanizaciones urbanas en Perú (que promueven ambas a favor y en contra del presente y futuro más probable del empoderamiento), las implicaciones de esta perspectiva.

Palabras clave: empoderamiento, representación democrática.

ABSTRACT: This paper addresses the question of what happens to political parties when their members leave and disperse. We argue that the answer depends on the type of party. In particular, we show that parties that are based on a single issue or a single leader are more likely to disintegrate when their members leave, while parties that are based on a broad set of principles are more likely to survive. We also show that parties that are based on a single issue or a single leader are more likely to disintegrate when their members leave, while parties that are based on a broad set of principles are more likely to survive.

movements, mobilization, empowerment and disempowerment in the recent experience of Venezuela and Perú. The puzzle that concerns us is of course not limited to these two countries: it is common to all the Andean republics, and in different ways, to much recent experience of urban mobilization in Latin America and beyond. After a brief account of urban citizen movements and politics in our two cases, we outline general reflections on the nature of empowerment and disempowerment, on the peculiar combination of strengths and weaknesses that mark many contemporary movements. A close examination of types of movements and their links with political parties and protest follows. The character of city life is important here. We close with analysis of recent waves of urban mobilization in Perú (that sparked the ouster of president Alberto Fujimori) and in Venezuela (both for and against president Hugo Chávez Frías), and with reflections on the likely future of empowerment and disempowerment for urban citizens and the implications of this perspective for democratic representation.

Key words: empowerment, disempowerment, urban movements, social protests, democratic representation.

I. EL PUZZLE*

El puzzle está formado por tres hechos claves que sitúan a Venezuela y a Perú en una interesante perspectiva comparada, proporcionando al mismo tiempo terrenos de comparación entre los procesos políticos y los procesos sociales que cada país ha experimentado en los últimos veinte años. El primero apunta a la caída, el declive y la desaparición eventual de los poderosos partidos políticos del pasado y del sistema de organizaciones y normas políticas construido alrededor de ellos. El segundo trata la creación, expansión, crecimiento hasta la prominencia y decadencia (a veces después de la consecución de objetivos específicos) de redes de organizaciones civiles, a veces referidas como «sociedad civil» o «movimientos populares», dependiendo del país y de las circunstancias. El tercero atañe a la tradición de movilización, activismo y protesta sostenida (asociada con la trayectoria de nuevas redes y movimientos), que crece hasta el máximo en momentos de crisis y desaparece con posterioridad. En ambos países, y durante extendidos períodos de tiempo, un gran número de personas fueron movilizadas para apoyar y sostener acciones colectivas, muchas veces de forma arriesgada, como marchas, campañas de recogida y entrega de firmas, protestas, manifestaciones, sentadas y otras prácticas de este estilo. Encontramos una gran abundancia de nuevos y a veces efímeros grupos, que se unen a organizaciones más consolidadas como sindicatos y patronales, partidos políticos y grupos profesionales, para alcanzar y mantener el esfuerzo. También observamos momentos de crisis relevantes, examinados con más detalle más adelante, incluyendo el movimiento de rechazo a la reelección de Fujimori en el año 2000 o las oleadas de movilizaciones y contramovilizaciones (centradas en el gobierno de Chávez y su supervivencia), comenzadas en la primavera del 2002 y culminadas con una destacada huelga que resurgió en diciembre del 2002 prolongándose hasta febrero del año siguiente.

* Traducción realizada por Óscar García Luengo.

1. Sobre Perú ver, entre otros, J. J. Gómez (1998), J. J. Gómez (1999), Venezuela, entre otros, M. COPPEDGE (1998), D. LEVINE (2003 y 2002), M. LÓPEZ (2002).

La reciente experiencia de Perú y Venezuela es la que no insistiremos aquí¹. El punto de partida de las sociedades tan dispares, radica en la misma base común para enfrentarnos a la crisis: la crisis de la fundación en la democracia. Es la crisis de la representación y no siempre exitosa, lucha por la representación mediante reformas institucionales (reformas de representación) y reforzar el control social. En cada caso, el esfuerzo fue alentado por factores ajenos a la red de partidos políticos, la crisis económica y el impulso de la política. En Perú, las crisis se originaron por corruptos e irresponsables partidos políticos que dejaron la sociedad civil en una arena para las protestas y las demandas sobre representación. En este sentido, la crisis de la representación analizamos aquí implica más que una crisis de la representación a través de la crisis de la representación que politiza nuevas demandas y cortocircuito de los movimientos y las protestas en la representación duradera que empodera a la ciudadanía.

Perú y Venezuela se enfrentan a la crisis de la representación. Perú es un país pobre, dividido entre la élite y la clase media, de fugaces episodios de democracia y de protestas que acompañaron la restauración de la democracia. Un significativo nuevo comienzo en algunas regiones del país, que fueron conducidas a acciones políticas y a la liberación de los pueblos indígenas en la década de 1970 y liberados más tarde. En las elecciones de 1980, hubo quizás por primera vez una elección propia para la política electoral, que coincidió con el arranque del movimiento Sendero Luminoso. El movimiento popular se originó en las regiones andinas: Sendero Luminoso y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) acabaron con él. En el mismo período, se produjo la crisis de la representación, que alteró profundamente la sociedad, la multiplicidad de nuevos grupos y espacios que se crearon y se virtieron en elementos de la escena política. Ésta fue también una época de protestas y movimientos populares, haciendo que las instituciones democráticas fueran protagonistas de la crisis, cuyo creciente autoritarismo, ma-

agonía. La combinación de violencia, declive económico e institucional y liderazgo desleal fue mortal para los movimientos urbanos. Si bien la capacidad y voluntad para la movilización se mantuvo, como fue visible en las intensas protestas contra la fraudulenta reelección de Fujimori en el 2000, los movimientos carecían de organización estable y estructuras para garantizar cierta continuidad y rendición de cuentas.

La experiencia venezolana en movimientos urbanos empieza más tarde (mediados de la década de 1980) y comienza con un sistema democrático bien consolidado: el objetivo fue «democratizar la democracia» mediante la extensión del acceso de los ciudadanos y reduciendo el poder de los poderosos partidos políticos estatales y el dominante aparato del Estado. El sistema democrático existente fue mucho más fuerte, rico y profundamente establecido que en el caso de Perú. Desde esta posición de fortaleza, el hundimiento es más visible. Empezando a finales de la década de 1980, el declive económico e institucional comenzó a dejar huella, la desafección popular para con las instituciones establecidas (especialmente los partidos políticos dominantes) creció violentamente y el sistema político entró en una crisis que continúa hasta nuestros días. Como en el caso peruano, estos desarrollos fueron acompañados de la emergencia de un amplio catálogo de movimientos civiles concentrados en las ciudades, que demandaban una representación más auténtica y fiscalizada. Los movimientos venezolanos difieren de los peruanos en varios sentidos, especialmente en el hecho de que desde el principio sus miembros de base y la agenda han sido predominantemente de clase media. Las demandas iniciales de los movimientos tomaron forma en reformas centralizadas que devolvieron el poder a los Estados y las ciudades, ampliaron el número de cargos elegidos y redujeron las barreras para la participación. Pero estas reformas fueron suprimidas por las continuas crisis del país y quedaron marginadas por las victorias de Hugo Chávez, quien llegó al poder con una agenda de cambio total completamente diferente (Kornblith, 1999; Salamanca, 2003; Levine, 2002). El poder inicial del movimiento de Chávez fue producto del colapso de las anteriores estructuras políticas: tan pronto como éstas recuperaron terreno y los movimientos ciudadanos comenzaron a emerger otra vez, la oposición se reforzó, principalmente en forma de movilizaciones de la sociedad civil, buscando de nuevo fuera de las estructuras formales del sistema político la reconstrucción política y su control.

Resumiendo, en ambos países el descrédito y desgaste de los líderes establecidos y de los partidos, combinado con un fracaso institucional y una sostenida crisis económica, abrió el camino, en diferentes momentos y grados dependiendo del país, a un amplio número de movimientos emergentes que reclamaban tener voz propia como «sociedad civil». Los participantes de estos movimientos buscaron con su activismo, no sólo satisfacer demandas inmediatas (por ejemplo sobre servicios o vivienda) sino también reclamar, con su actividad, una ciudadanía diferente a las establecidas en las estructuras convencionales de representación. Ellos proyectaron firmemente en la escena pública no sólo sus demandas sino también la imagen de ellos mismos como ciudadanos. Su activismo politizó espacios urbanos en los dos países de forma novedosa, creando nuevas formas de acción y construyendo (a veces literalmente) nuevos espacios para este activismo. En ambos casos, los resultados a largo plazo en términos de

beneficios sostenidos, nuevas polémicas. La debilidad, reversibilidad, nos obliga a reconsiderar las posibilidades y a buscar soluciones posibles en la elección.

La relación del empoderamiento y la representación democrática ocupan las discusiones sobre empoderamiento. Subrayan la necesidad de proveer de forma posible el acceso al poder –para la representación–. Comunicaciones, la «calidad» y «auténtica» simplemente que los resultados electorales y de forma justa (de acuerdo con la voluntad del pueblo). Admitiendo el sufragio universal y abiertas, la representación que no tiene las barreras para la organización, la participación política, haciendo el voto controlables y accesibles para los ciudadanos, unir nuevos espacios urbanos, garantizar el tema político de forma que permita la representación. Nuestra consideración es diferente.

La línea de análisis que seguimos (y representación democrática) se extiende más allá de los detalles, para establecer las relaciones entre espacios sociales, movimientos y avance desde la sociedad. En los países se han repetidamente y han buscado arriesgadas, movilizaciones de todo tipo. Deben ser capaces de unir estas demandas. Esto ha ocurrido. Los líderes de «arriba hacia abajo», en la que bien no hacen las uniones o las movilizaciones ciudadanas son con demasiado de canales estables de control teórico y práctico atañe a repensar la representación política de forma que sea nuestra tarea aquí.

II. POLÍTICA Y MOVIMIENTOS EN PERÚ Y VENEZUELA

El desplome de los partidos políticos y el desarrollo de una explícita política antipartidista es denominador común en la reciente experiencia tanto de Venezuela como de Perú. En Venezuela, el sistema político entero construido alrededor de poderosos y estables partidos políticos, se debilitó tras una larga presión económica, exacerbada por una corrupción excesiva y un liderazgo ineficaz y quedó dañado después por reformas puestas en marcha a mitad de la década de 1980. Aunque no es fácil estimar con precisión el comienzo del declive, la mayoría de los analistas coinciden en que a comienzos de la década de 1990, los dos partidos dominantes (AD y COPEI) eran sólo un reflejo de lo que fueron con anterioridad (Molina y Pérez, 2002; Crisp, 2000; Levine y Molina, 2002). Su débil posición redujo la capacidad de respuesta efectiva de los líderes a la crisis creada por los dos intentos de golpe de Estado en 1992 y a la continua crisis económica. Una vez agotada la legendaria disciplina de partido, se hizo mucho más difícil la consecución de acuerdos entre los partidos en la legislatura. Con el COPEI dividido, su fundador Rafael Caldera llevó a cabo una brillante campaña antipartidista para ganar la presidencia en una carrera de cuatro frentes en 1993. Ésta fue la primera elección desde la restauración de la democracia en 1958 que no fue ganada ni por AD ni por COPEI. Aunque estos dos partidos continuaron teniendo una buena posición en las elecciones locales y regionales, el período estuvo marcado por continuas divisiones intrapartidistas y por la expansión de las organizaciones ciudadanas (incluyendo el insurgente unionismo), lo que escapó a los controles del partido, elevándose los niveles de abstención y extendiéndose los sentimientos antipartidistas.

La elección de 1998 y los votos nacionales, regionales y locales subsiguientes han certificado la muerte del *status* de los partidos políticos consolidados y de todo el sistema político construido alrededor de ellos. El presidente Chávez ha ido en contra de los partidos y, consecuentemente, las elecciones nacionales han sido dominadas por coaliciones personalistas, tanto «pro» como «anti» Chávez. El sistema electoral inventado para las elecciones de la Asamblea Constitutiva, que contempló la nueva Constitución Nacional Bolivariana, ofreció a los seguidores y aliados del presidente Chávez un porcentaje desproporcionado de escaños (95% de los escaños con el 66% de los votos). Las elecciones legislativas siguientes volvieron al sistema anterior; con resultados más proporcionales².

En Perú, los partidos políticos (con la excepción del APRA) no fueron tan fuertemente estructurados o profundamente organizados como en Venezuela. Un sistema político dependiente de la competencia electoral entre los partidos establecidos, cada uno de ellos con movimientos y organizaciones afiliadas, hicieron una aparición tentativa en 1955 y, de nuevo, con la restauración de la democracia y la política civil después de

2. El problema de la violencia política es una prioridad en Perú. Los líderes de la década de 1980 son ahora las principales fuerzas en el nuevo régimen democrático: liderazgo local, municipios, gobierno regional. También hay jóvenes líderes emergiendo. Sobre patrones recientes de violencia y protesta en Venezuela ver T. HERNÁNDEZ (2002) y M. LÓPEZ MAYA (2002).

1980. En este «sistema», el APRA das atrás por Fernando Belaúndez Izquierda Unida, una débil coalición. 1980, la fortuna de estos partidos nómica y la insurgencia (liderada dió por todo el país, el APRA ganó. Izquierda Unida ganó gradualmente finales de la década de 1980, si bien

Las elecciones de 1990 coronaron a los candidatos a las presidenciales por las fuerzas políticas centrales. Esta elección tuvo como resultado la victoria de los candidatos apoyados por los partidos de la Alianza Popular, encabezados por el candidato independiente Alberto Fujimori. El 29 de enero de 1990, Fujimori asumió la presidencia y disolvió el Congreso y comenzó su expulsión tras su reelección en 1995. La victoria de Fujimori en la primera vuelta fue el ex presidente Alan García.

En ambos países, el hundimiento (o débil) fue acompañado, propulsado por ciudadanas y de nuevos movimientos. El proceso fue visible antes en Perú, en oposición al gobierno militar y organizadas para alcanzar necesidades. La situación peruana jugó un importante papel en los movimientos, entrenando activistas entre ellos. Al final de la década de 1980, la crisis de decadencia económica (que habían comenzado con una creciente violencia tanto dentro como fuera del gobierno), dañó la capacidad de movilización. Las movilizaciones continuaron (Díaz, 1997), pero fueron más efímeras y poco racionales en el liderazgo de la élite. Los aliados clave. Los partidos se debilitaron y desarrollaron un sentimiento de desacuerdo con sus propios objetivos e intereses y con los resultados políticos.

En Venezuela, el poder de las ciudades para colonizar la sociedad es bastante el crecimiento de asociaciones

3. El proceso de reminiscencia condujo al referéndum que terminó con la «dictadura invisible» (M. A. GARRETÓN, 1983).

empezaron a aparecer a mediados de la década de 1980, con raíces en los movimientos del sector de los negocios y en todos los grupos de propietarios urbanos opuestos a un desarrollo ilimitado. Pronto la defensa de los intereses vecinales se extendió en una agenda más amplia que buscaba la creación de más gobiernos autónomos urbanos, con alcaldes y gobernadores independientes electos y no nombrados. Esta reforma, que tuvo efecto en 1989, vino acompañada de otras medidas descentralizadoras y empezó a reconfigurar las dinámicas del liderazgo político y de las campañas en la década de 1990. Al mismo tiempo, el largo declive económico, que continuó durante la década de 1990, deterioró la capacidad de los líderes políticos para disponer patrocinio y, por lo tanto, para mantener lealtades. Aparecieron grupos profesionales autónomos y fundaciones privadas, nuevos grupos empresariales consolidaron su posición y movimientos sindicales independientes empezaron a ganar terreno. Estos últimos, más exitosos en las plantas de acero de la Guyana, organizaron un exitoso movimiento político, la Causa R (la Causa Radical). El término «sociedad civil» apareció como una característica habitual del discurso político venezolano y se empezaron a hacer esfuerzos para forjar cierta clase de posición unificada (Gómez Calcaño, 1998; Salamanca, 2003; Levine, 1998).

La trayectoria política de Hugo Chávez Frías, su elección como presidente en 1998 (confirmada en sucesivas votaciones bajo la nueva Constitución y la nueva legislación electoral) y su proyecto político, supusieron un reto para la legitimidad del andamiaje político de las cuatro décadas anteriores, proponiéndose construir un nuevo sistema político y social, supuestamente más democrático. El profundo populismo basado en una retórica de clase ha sido el pan nuestro de cada día de la «Revolución bolivariana» desde el principio, señalando la movilización de las masas como uno de los principales elementos legitimadores. Como anteriormente Fujimori en Perú, Chávez se ocupó de destruir los partidos políticos preexistentes (y sus grupos asociados, destacando los sindicatos), con la diferencia de que Chávez quería reconstruir la política con un estilo «revolucionario» y «participativo» y con un amplio cuadro de arenas y grupos en contacto directo con el líder y el Estado. En la práctica, esto ha significado el ataque y desmantelamiento de las viejas estructuras, inventando y reinventando compulsivamente otras nuevas, incluyendo principalmente el propio partido político del régimen, redireccionando los recursos estatales a lo que ha sido vagamente definido como «círculos bolivarianos».

El hundimiento y fracaso del viejo sistema fue tan absoluto que le llevó a la oposición varios años comenzar a reagruparse. Los primeros pasos llegaron con el fracaso gubernamental para «tomar» la Universidad Central de Caracas para el «pueblo» y con el fracaso del referéndum convocado por el gobierno para «renovar» el liderazgo de la Federación de Sindicatos. Estos intentos fueron seguidos por una importante ola de paros laborales, huelgas y marchas, que se convirtieron en un rasgo habitual del calendario en Caracas y, en menor medida, en otras ciudades. Las formas de protesta comunes en otros países, como los cacerolazos (golpeo sistemático de sartenes y ollas que genera un ruido ensordecedor) y las caravanas de vehículos zumbando sus bocinas, fueron utilizados y las marchas masivas (dejadas de lado por un largo tiempo desde que

se tornó a favor de las campañas río. Un régimen que señaló comisión, fue ahora objeto de numerosas de cierta debilitación y teniendo en cuenta que el régimen empezó a exhibir sus propios rasgos de diciembre de 2001 hasta la fecha, una inmensa marcha que iba descontrolada, fue atacada por pistoleros. Muchas de las marchas, el gobierno fue reemplazado por diferentes coaliciones de ciudadanos, «tira y afloja» entre los grupos en la capital. Finalmente, el ritmo de las marchas se aceleró, tuándose durante el otoño del 2002 y principios del 2003.

Es instructivo comparar las trayectorias de Chávez y Fujimori, ambas compitiendo para echar, apoyadas por una coalición de grupos y organizaciones que operan a nivel local y nacional con experiencias y conocimientos del OAS de fraude e irregularidades. Las crecientes revelaciones de corrupción y deshonestidad en las movilizaciones fueron comenzadas por las organizaciones que empezaron con actos simbólicos y simbólicos, tales como las marchas y las lavadas de la bandera (parte de la protesta), se extendieron, se incorporaron y se convirtieron en una fuerza financiera y organizativa⁴. La campaña de Chávez, que comenzó con los Cuatro Suyos⁵ en Lima, el 28 de febrero de 1992, se extendió a las organizaciones regionales y nuevos elementos en el público. Las organizaciones que se formaron en 1980 habían desaparecido de la escena política, perdiendo su *status legal* después de la Constituyente en 1993 y más tarde, sólo asumieron el poder una vez que Chávez se convirtió en presidente.

4. Los trabajadores sindicados y las organizaciones sindicadas y la federación de empresarios no es, por lo tanto, una fuerza política común, llevando la federación sindical a la Federación de Sindicatos. El referéndum sindical del otoño de 1992, que se convirtió en el paquete de leyes anunculado en la misa de 1993, se convirtió en una ola de protestas por algún tiempo, inflamadas por la protesta y la protesta. Los medios han sido una de las principales causas de las protestas, éstos han respondido de igual manera.

5. El nombre procede de las cuatro ciudades que forman la capital de Venezuela: Caracas, Maracay, Valencia y Maracaibo.

En Venezuela, por el contrario, tan pronto como la oposición al presidente Chávez se repuso y empezó a tomar fuerza, el pilar organizativo para sostener la acción no reca-yó en los grupos formados en los diez o quince años anteriores. Una inesperada pero muy efectiva alianza antigubernamental fue generada entre la federación de sindicatos, la Iglesia Católica y los medios de comunicación. Los primeros dos facilitaron recursos organizativos, mientras que los dos últimos dotaron de legitimidad y amplificaron la voz del pueblo. Que esta coalición fuera capaz de poner mucha gente en las calles de forma regular dependía menos de los propios miembros de los grupos, que en la motivación de una red de grupos vecinales y defensores de los derechos humanos⁶ articulada voluntariamente.

A pesar de las continuas referencias al papel de la «sociedad civil», en ningún país los miembros de las organizaciones de la década anterior, una vez que ellos se vieron como potenciales fundadores de un nuevo tipo de política, jugaron un papel central. Diferentes tipos de organizaciones emergieron para tomar el liderazgo. Aparte de los grupos en defensa de los derechos humanos, los cuales han crecido en el área en los últimos quince años en respuesta a las dictaduras (*Sikkink*), los actores organizativos reales fueron tanto coaliciones ocasionales formadas para un objetivo concreto alrededor de un líder específico (por ejemplo, Alejandro Toledo y Perú Posible) o viejas organizaciones como sindicatos, federaciones empresariales o la Iglesia. La movilización y el compromiso no fueron tan sostenidos por las propias estructuras de los grupos como por la presencia de un número de grupos e individuos, vinculados débilmente entre sí que facilitaron conexiones e intercambio de información, apoyo y recursos, de forma transversal más allá de grupos, sectores sociales y espacios físicos (Granovetter, 1973; Smith, 1996). Si esto es correcto, la movilización –incluso la movilización sostenida y masiva– es compatible con la ausencia de un soporte organizativo como el suministrado tradicionalmente por los partidos políticos. Pero al mismo tiempo, la ausencia de una estructura organizativa estable puede deteriorar la potencial consolidación de beneficios y hacer más fácil a los ciudadanos plantear demandas y conseguir que los líderes rindan cuentas, sin la necesidad de una nueva ronda de movilizaciones masivas que desafíen a las instituciones. Esto merece un análisis más exhaustivo.

III. CONSIDERACIONES SOBRE EMPODERAMIENTO, DESEMPoderAMIENTO Y REPRESENTACIÓN

El empoderamiento es un concepto notoriamente plástico usado a menudo en combinación con otros términos igualmente dinámicos como «sociedad civil» o «capital social». Como en el caso del término *accountability* (rendición de cuentas), el *empowerment* no tiene una equivalencia fácil en español, viiniendo el neologismo «empoderamiento» a ocupar este nicho lingüístico. La elasticidad de estos conceptos refleja su

6. La presión fue tal en Perú que el conocido libro de J. MATOS MAR (1984) es titulado *Desborde Popular y Crisis del Estado en el Perú*.

carácter multidimensional: se refiere, identidad personal y colectiva, laidad de asegurar bienes y servicios sociales. De estos conceptos, «emoderamiento denota un tipo de pranizativo, que provee a los ciudadanos esfera pública, reduciendo las barreras de un sentido de autoestima y rec

En este sentido, la relación entre la religión y la política parece quedar suficientemente clara. Los cristianos se abrieron a sí mismos como ciudadanos y abrieron el camino para hacerlo ciudadano. El énfasis en la identidad entre empoderamiento y organización, uniendo las capacidades individuales y las organizacionales, amplios. Pero al mismo tiempo, las estrategias y las decisiones del líder se asfixia la decisión de las personas de producir también desempeño. En Estados Unidos, Warner (1993) argumenta que el empoderamiento de la religión estén la religión y la felicidad en la religión no tienen que ver. Los que creen en la religión no son aquellos que creen en la religión. Warner (1993) recae en un argumento que sostiene que la construcción a largo plazo de la religión y la posición requeridos para trabajar juntos, ni mucho menos en simplemente

Esto es mucho pedir para que muchos movimientos no han sido tan sistemáticos y empírico más reciente sobre la representación en América Latina, cada por las exageradas expectativas de un nuevo movimiento. La autonomía de los partidos políticos, instituciones estatales y la ética de «lo pequeño es bello» hicieron de política germinaría a partir de la secuencia, esto dispondría la base para una nueva clase de partidos políticos más democráticas y más empoderantes.

7. P. OXHORN (2002: 14-15) asocia deben ser llevados a cabo sistemáticamente los de quienes son, al margen de clases demostrado ya el éxito de esos esfuerzos.

pasado (Drogus, 1997; Hellman, 1992; Lander, 1995; Levine y Stoll, 1997; Lora, 2002; Ortner, 1995; Oxhorn, 2001; Tovar, 1991).

Esto no ocurrió. Caso tras caso, las nuevas políticas fueron absorbidas sin problemas por las anteriores y los movimientos acabaron separándose o simplemente se desmoronaron. El que estos movimientos fracasaran y el «empoderamiento» no persistiera no debería sorprendernos. Los movimientos a menudo fallan o acaban en agua de borrajas: el activismo es costoso y antinómico y las presiones económicas y familiares del día a día para la supervivencia hacen difícil la longevidad de la organización (Piven y Cloward, 1977 y 1998). En cualquier caso, como Stokes (1995) y otros autores han mostrado en el caso de Perú, el desarrollo de estilos de organización más participativos (y por lo tanto «empoderantes») entre las clases pobres urbanas no sustituye necesariamente a los viejos conceptos o formas de acción. La gente es práctica y los nuevos estilos de acción se sitúan como alternativa a considerar (y quizás para no emplear), como parecen indicar las circunstancias.

¿Qué significa desempoderamiento? ¿Cuál es el camino entre el empoderamiento y desempoderamiento? Se observa un abandono del activismo a menudo provocado por el agotamiento, a veces por presiones familiares (normalmente de género, de la mujer querida). También encontramos un fracaso en la renovación del liderazgo. Los grupos que apoyan la democracia pueden por supuesto pasar por autoritarios y los líderes podrían encontrar difícil la apertura del camino a las nuevas generaciones. El problema es notorio en los grupos ligados a la Iglesia Católica (como muchos lo han sido) donde, dada la dependencia en los clérigos, se produce una enorme vulnerabilidad cuando un clérigo más conservador entra en escena. Finalmente, por supuesto, con la apertura de los nuevos espacios políticos (a través de transiciones a la democracia o reformas de los sistemas democráticos) los activistas más jóvenes encuentran otras salidas, quizás más agradecidas o menos costosas, para sus esfuerzos.

Nosotros no sugerimos que el empoderamiento es necesariamente ilusorio. Muchos hombres y mujeres han adquirido realmente nuevos conocimientos y retratos y los han proyectado en otras personas de sus comunidades. El punto central aquí radica en que el concepto es incompleto y la realidad frágil. La dificultad recae en los vínculos de la organización y la construcción de una representación fiel que podría perjudicar la consolidación de beneficios. Los lazos entre los espacios civiles de empoderamiento y los espacios públicos de representación política, por un lado, y el poder estatal, por otro, siguen siendo problemáticos. La ausencia de vínculos estables para reforzar las estructuras también reduce la visibilidad de los grupos en la esfera pública, lo cual es esencial para su reconocimiento como actores legítimos demandantes de derechos y bienes.

El problema teórico es discernir cuál es el camino en el que el empoderamiento es perseguido, la representación construida o las conexiones realizadas, por parte de los movimientos urbanos, que tienen cierta autolimitación o, quizás, unas cualidades auto-destrutivas. Nuestro concepto de representación debe ser lo suficientemente amplio para incluir a ambos grupos y a las estructuras políticas formales. También necesitamos entender cómo el destino de los grupos y las protestas están relacionados con los mecanismos electorales formales de representación. En otras palabras, cómo las

elecciones, los mecanismos electorales, los candidatos, delimitación de las circunscripciones con los esquemas dentro de los sistemas institucionales, principalmente electorales, especialmente en consideración

Nuestro recorrido anterior pone de manifiesto que a pesar de que el modelo de Venezuela que en Perú, en ambos países, es la base de este modelo (y de sus numerosos defectos) es un largo proceso de deterioro organizacional y de control del partido más grande. Los grupos operaran en los recientes años y incluyen la expansión de los movimientos, las reglas electorales en el desarrollo de la democracia, la gencia de un número de grupos y organizaciones en la sociedad civil. En Perú, donde los grupos se han tomado la iniciativa, el crecimiento de las viejas estructuras y produjo resultados unidos por la necesidad común de vivienda, alimentación, transporte, locutores fiables y de accesos regulares. La relación entre las razones y las causas más generales es difícil de identificar.

En ambos países, los nuevos grupos necesitan tener las necesidades muy específicas determinadas por la situación económica. La satisfacción de las necesidades requiere la estructuración de las instituciones y las campañas a favor de la reforma política. Tener estas campañas requirió de que los grupos pudieran suministrar y conseguir apoyo y caer en esquemas clientelistas y clientelares. Una no necesita tener el apoyo de la élite y su calibre (Eckstein, 1977) y sus aliados en el Estado y en arena. Los grupos pueden tener otras prioridades. Es más, es más importante en este caso. Por lo tanto, es más importante tener aliados con recursos autónomos, que libres de la élite. El carácter de clase media de muchos grupos garantizaría una independencia equitativa.

No se puede cuestionar que las organizaciones en Perú y en Venezuela necesitan las condiciones para la organización, la representación y las estrategias aprovechadas con gran vigor en los últimos años.

y se emprendió un profundo proceso de desalineación y realineación política. Pero los beneficios fueron efímeros y tanto Fujimori como Chávez trabajaron para recentralizar la política y retener y limitar las reformas que tomaron fuerza en la etapa previa. Los gobiernos de Fujimori desde 1992 tornaron más y más hacia un modelo populista, haciendo a los grupos de ciudadanos dependientes del Estado y restringiendo el acceso independiente a los recursos. El régimen de Chávez hizo un esfuerzo (exitoso por un tiempo) para saltarse los procesos formales de mediación y representación de intereses, a favor de una relación más directa entre el líder y la gente (Levine, 2003; Salamanca, 2003). Esto significó un paso atrás para la independencia de los movimientos sociales y para la descentralización, lo que les facilitó a éstos el acceso a espacios viables para la movilización y para la acción. En ambos casos, la presencia de ONGs se redujo y muchos grupos transnacionales tornaron su atención y recursos a nuevos campos de acción en Europa central y del este.

En muchos casos, la revalorización de los trabajos sobre movimientos urbanos y empoderamiento ha estado ligada a la literatura de la democratización y la transición a la democracia. Creemos que los temas pueden ser situados de forma más efectiva en un contexto más amplio de consideración del activismo, los movimientos sociales y las instituciones. Muchas transiciones a la democracia presentan la siguiente anomalía: la movilización ciudadana y los nuevos grupos civiles protagonistas en la campaña a favor de la democracia se debilitaron, se dividieron o simplemente desaparecieron con la restauración de la democracia. La anomalía no sólo recae en este agotamiento, el cual tiene cierto sentido dada la disponibilidad de los canales de acción y la competencia para la obtención de apoyos y recursos. Aunque el debilitamiento fue más o menos inevitable, el proceso fue impulsado en casos clave por una concepción ingenua e inviable de la política y por unos aliados políticos infieles y desleales. Con la posible excepción de Brasil, donde el PT tiene claras raíces en los movimientos populares y ha crecido gradualmente en todos los niveles, la experiencia común ha sido presidida por división y traición (Blondet, 1991; Lander, 1995; Levine 1998a; Levine y Stoll, 1997).

Si reenfocamos el problema en términos de movimientos sociales y activismo, la anomalía presentada por éste en referencia al desempoderamiento es más fácil de entender. Encontramos dos puntos fundamentales. Primero, los movimientos normalmente nacen, crecen, triunfan o fracasan y se debilitan en consonancia con lo que Tarrow (1994) denomina «ciclos de protesta». Este autor asegura que lo que es característico de estos períodos no radica en que todas las sociedades se desarrollan en la misma dirección y al mismo tiempo, de hecho raramente lo hacen, o en que estos particulares grupos populares actúen del mismo modo una y otra vez. Los efectos de demostración de la acción colectiva por parte de un pequeño grupo de «tempranos insurrectos» activan una serie de procesos de difusión, extensión, imitación y reacción sobre otros grupos que están habitualmente inactivos. En este sentido, la cuestión apropiada no es tanto por qué los grupos no sobreviven, sino qué pasa si ellos dejan algún legado en términos de nuevas reglas, expectativas o capacidades. El segundo punto atañe a la estructura de oportunidad que los ciudadanos urbanos afrontan –recursos y disposición de canales institucionales, rendición de cuentas y acceso–. Escritores como Castañeda (1991) han

argumentado que un vistazo sobre el «gobierno» ofrece el camino más para el empoderamiento sostenido de los sectores populares. Un legado claro de normas sobre descentralización, elecciones representativas y duradera democracia dejó al final a los activistas en la misma dependencia. La historia es incompleta, con muchas reformas que no llegaron a la ingeniería y el diseño institucional. Una norma que una excepción. La institucionalización amplía las probabilidades, pero no el voto electoral o la demasiado habitual dependencia.

IV. ESPACIOS Y MOVIMIENTOS URBANOS

Las consideraciones anteriores se aplican tanto a los espacios urbanos y de los movimientos como a la arena de acción y sus ciudadanos. Como muchas veces en América Latina, el espacio urbano en Venezuela y Perú está desigualmente desarrollado entre las grandes ciudades y las zonas rurales. Recientemente, las ciudades han crecido más que las zonas rurales. Las migraciones internas son más numerosas en los dos casos. En Venezuela, las migraciones se han dirigido a la inversión urbana para y por el petróleo, en la década de 1930, dejando la agricultura urbana vino más tarde en Perú por la migración extrema en el campo y por la guerra civil en las ciudades. Las migraciones de grupos étnicos a niveles desiguales llegaron a Lima trayendo con ellas la cultura del *quechua*.

En ambos países, la nueva población urbana, particularmente en las superciudades de agua, transporte, educación y trabajo.

8. El Informe Anual de PROVEA, que recoge datos sobre derechos humanos, recoge que a diferencia de otros países, que en febrero de 1989, fue posible constituirse en asociaciones, Perú estaba ampliándose. Ahora, la participación política se ha extendido para nuevos grupos: médicos, enfermeras, profesionales culturales, amas de casa o movimientos de mujeres. La protección de los derechos básicos.

La configuración espacial de la expansión urbana y la disponibilidad del transporte dentro de la ciudad, ha impactado notablemente en la organización, en los movimientos ciudadanos y en el empoderamiento. Nuestro análisis de la emergencia de los movimientos y de sus problemas urbanos es estructural: siguiendo el camino de Eckstein (1989) situamos a los movimientos en un contexto creado por la estructura de oportunidad política de nación y ciudad y la forma y el contenido específico dado por la disponibilidad de los recursos y por aquellos presentes (ONGs, sindicatos y partidos políticos) compitiendo para la provisión de servicios, orientación y liderazgo. Esta estrategia tiene sentido teórico. También práctico, dadas las dificultades de estimación fiable del número de movimientos, activistas y asociaciones existentes en cualquier momento⁹. Nosotros ofrecemos estimaciones donde es posible, pero avisamos del peligro de confiar sólo en números.

En Perú la trayectoria de los movimientos urbanos no siguió la de otros movimientos sociales, en el sentido de una acumulación gradual de fuerzas. Más bien, después de cada movilización triunfante, parecían desvanecerse. Como apuntaba desesperado un líder local, una vez que la electricidad fue instalada y el alumbrado público establecido, «ellos compraron un televisor y se quedaron en casa». Lo mismo pasó después de luchar por conseguir el suministro de agua corriente y el alcantarillado para el vecindario y obtener este servicio. El movimiento urbano ganó importancia y presencia en Perú durante la década de 1970, cuando la esfera pública estaba limitada por la presencia de un régimen militar, con elecciones sólo posibles en la esfera privada, con organizaciones voluntarias libres para elegir y congregar a sus líderes. El Estado regulaba esas elecciones y reconocía el derecho de los líderes electos para negociar los servicios públicos. Estas prácticas electorales y la experiencia de representación fue importante para la creación de una esfera pública independiente dentro del régimen autoritario. Hasta el final de la década, hubo intentos para centralizar las organizaciones vecinales en Lima.

¿Cómo podemos entender mejor el empoderamiento de los actores urbanos durante la década de 1970 en un contexto de cambio del sistema político? ¿Cuál fue el significado del poder que se había venido generando en esos vecindarios? Desde la perspectiva de las teorías de la acumulación de poder esto fue claramente un proceso gradual de creciente movilidad social y no de una transformación mayor de las relaciones de poder. Pero desde la perspectiva de la construcción de la ciudadanía, hubo realmente un cambio significativo en términos de poder en tanto en cuanto los sujetos o los clientes miembros de esos movimientos se convirtieron en ciudadanos con derechos. La búsqueda y el ejercicio de los derechos políticos en las ciudades está condicionada por la remodelación de éstas como arenas políticas no sólo para la protesta (espacios para reclamar) sino también como sitios para la clásica representación, incluyendo la creación de unidades de gobierno relativamente independientes. Con el fin de la dictadura militar y el advenimiento de la política democrática en 1980, las elecciones municipales inauguraron

9. Definiciones distintas de lo que es sociedad civil implican también diferencia en los números, ver P. OXHORN (2002) y L. SALAMANCA (2003).

un espacio electoral público para que los vecinos se convirtieran en alcaldes o miembros de concejos.

Durante la década de 1980, los movimientos urbanos experimentó un cambio drástico. Los vecinos se convirtieron de ella y los que fueran miembros de la esfera pública en la esfera privada: la consecución de los servicios que se habían cambiado de forma radical. Los vecinos se convirtieron en alcaldes y en todo un nuevo esquema de signo político. La militancia en las organizaciones vecinales condujeron a enfrentamientos entre las organizaciones cooperativas, a diferencia de las asociaciones vecinales o el Estado, produciéndose una competencia entre los movimientos sociales anclados en ideas y prácticas que responden al desarrollo urbano y a las necesidades autogestionadas. Las ciudades se convirtieron en espacios de viejas incursiones o se extendieron a las zonas rurales unifamiliares en plurifamiliares.

En los espacios urbanos de Lima y Callao se convirtieron en espacios de unos objetivos muy concretos (residencia, trabajo, educación, salud, propiedad, agua, electricidad, paseos, etc.). Los vecinos se convirtieron en propietarios por los gobiernos municipales y se convirtieron en candidatos para las elecciones municipales. Los vecinos se convirtieron en expertos en gestión urbana, más que en la administración de los gobiernos locales. Una vez convertido el vecindario en un espacio de vecinos, las organizaciones vecinales se parecen a cualquier otra: asociaciones vecinales, asociaciones culturales, asociaciones de vecinos, sindicatos de profesores, etc.

Cuanto más aguda se hizo la crisis, más dinámicos se convirtieron los vecinos. Los vecinos se convirtieron en los que suministran alimentos, resistir el desempleo, el desalojo, el desmantelamiento y la arbitrariedad del Estado. Los vecinos se convirtieron en los que se organizaron y pudieron participar en las elecciones municipales. Los vecinos se convirtieron en la media principalmente: profesores, trabajadores, trabajadoras, trabajadores del transporte público. La continuidad de las protestas y las manifestaciones se convirtieron en los insistentes paquetes de ajustes que se aplicaron a los negocios. El resultado duradero de las protestas y las manifestaciones se acentuó fuertemente después de la crisis de 1992, que se convirtió en la escena nacional.

El carácter particular de esta crisis se convirtió en supervivientes en la vida urbana.

bajo Alfonso Barrantes, alcalde de Lima elegido por Izquierda Unida en 1983, distribuyó un millón de vasos de leche diariamente a nivel nacional a preescolares, mujeres que dieron a luz recientemente y, más tarde, a enfermos de tuberculosis. Existían también comedores populares, algunos autogestionados, otros patrocinados por parroquias católicas y organizaciones dependientes de los partidos, como por ejemplo las asociaciones de madres dependientes del APRA o las cocinas populares apoyadas por AP. El esquema común consistía en la asociación de un grupo de mujeres, que cocinaban en la casa de alguna de ellas y vendían la comida a un precio nominal a sus miembros, quienes recogían la comida y la llevaban a casa para tomarla con sus familias. Llegaron ayudas complementarias desde ONGs y el Estado, a veces mediante la donación de equipamiento para cocinar como hornos, sartenes y ollas y también mediante la provisión regular de alimentos, como aceite, arroz o trigo. El trabajo voluntario de sus miembros y su propia contribución a la hora de financiar la comida es central en este tipo de organización para la cooperación y probablemente una razón de por qué no se incorporaban las familias más pobres del vecindario.

Estas organizaciones y algunas similares fueron pioneras en el cambio de la concepción de la representación y en la forma en que la política era dirigida. En septiembre de 1988, después de la primera ola de políticas de ajuste estructural, organizaron una enorme movilización bajo el lema «Protesta como Propuesta». Ellos demandaban el apoyo del gobierno para comprar comida a los productores locales en vez de importarla del extranjero. Esto vino unido a ayudas para el desarrollo rural de los más desfavorecidos, añadiéndose las demandas de los campesinos a la agenda de los movimientos urbanos. Justo después, la Iglesia comenzó el Programa Social de Emergencia (PSE) ofreciendo los recursos para canalizar la ayuda internacional para los pobres. El programa abrió un espacio público donde el liderazgo de los comedores, la asociación empresarial CONFIEP, ONGs y la Iglesia Católica podían trabajar juntos para elaborar un plan de emergencia. Este programa continuó bajo el gobierno de Fujimori como el Programa de Emergencia Social (PES).

En 1990, los dirigentes de los comedores decidieron institucionalizar su derecho a recibir fondos públicos para alimentar a los desfavorecidos. Varias organizaciones, tanto independientes como vinculadas a partidos políticos, se unieron para la consecución de este objetivo y presionaron a legisladores de diferentes partidos, consiguiendo sus objetivos a final de ese año con una ley, promulgada por Fujimori, en la que se reconocía la responsabilidad del Estado en la alimentación de la población necesitada. Una exitosa organización de comedores llevó a las mujeres a la calle para oponerse al grupo terrorista Sendero Luminoso. En una movilización en El Agustino, ellas se manifestaron contra la huelga general convocada por Sendero Luminoso con el himno de «ni con hambre ni con balas» para reclamar su independencia y coraje, lo que costó muchas vidas.

Una vez que la distribución de la comida estuvo centralizada en el gobierno a mitad de la década de 1990, la dirección, que normalmente era elegida o rotada entre los miembros de las asociaciones, fue reemplazada por gente de la misma organización pero leales al régimen. Había unos 2.000 comedores autogestionados, 3.000 clubs de madres y

más de 7.000 comités del programadores políticos de esas organizaciones que fueron creados para cada vecindario. Las mujeres candidatas, que eran miembros del consejo municipal de sus propias organizaciones, pero tenían que tratar con ellas a sus circunscripciones.

Durante la década de 1990, la actividad de las organizaciones urbanas y las discusiones abiertas en las ciudades, por un lado, y el controlador principal de los grupos terroristas, principalmente en el territorio dentro de la ciudad y sus competidores. Por las mismas razones, los propósitos principales del gobierno eran establecer vínculos seguros con la población y las autoridades: el desempoderamiento del Estado. Las más importantes organizaciones estuvieron relacionadas con el asesinato de María Elena Moyano por Sendero Luminoso, un enorme vacío político, en tanto que los grupos proletarios y sólo la Iglesia Católica fueron para organizar lo que quedaba. El dato de Fujimori fue cuando la gente se reunió para la reunión y la protesta.

Tanto en Venezuela como en Perú (y los barrios de la capital) es una clase: desde marchas y manifestaciones jugaron un papel central en el movimiento popular en enero de 1958. La ocupación de una gran cantidad de poblados de chabolas y vida en la ciudad durante la década de 1960 se ha adelantado, una clase diferente en la década de 1970 con la emergencia política nacional y con la necesidad de esa acción. Se formaron asociaciones urbanas y en defensa de los derechos, presionar por una mayor autonomía, que esto conllevaría. Las primeras de 1970 en una serie de áreas de chabolas (favelas) y las Comunidades Urbanas) f

asociaciones. FACUR proyectó un modelo de asociaciones y federaciones regionales similares que pronto empezaron a extenderse por todo el país. A comienzos de la década de 1990, había federaciones en cada Estado, que en total agruparon unas 15.000 asociaciones. En 1987 el movimiento ciudadano consiguió la reunión de 140.000 firmas para pedir una reforma de la ley reguladora de los gobiernos municipales (Ley Orgánica del Régimen Municipal o LORM). Ésta fue una de las más importantes movilizaciones pacíficas hasta aquel momento en Venezuela. Los cambios en la ley incluían la elección de los gobernadores, la elección de los alcaldes, la creación de consejos parroquiales y la posibilidad de destituir los cargos.

El impacto del movimiento fue magnificado por la Escuela de Vecinos de Venezuela (EVV). Ésta surgió de una división de FACUR y se consolidó a nivel nacional a mediados de la década de 1980, con el importante apoyo de los empresarios y de ONGs nacionales e internacionales. Desde entonces, la EVV ha establecido oficinas regionales, ha montado un programa regular de cursos para asociaciones y cargos públicos locales y ha sostenido una gran variedad de cursos por correspondencia, reuniones periódicas y presentaciones en los medios. Los líderes de la EVV han venido resistiendo generalmente presiones para formar un partido político, prefiriendo desarrollar una serie de grupos de presión, cada uno dedicado a un área determinada. Por ejemplo, destacan Queremos Elegir, dedicado a la reforma electoral, Fiscales Electorales de Venezuela, concentrados en promover la implicación ciudadana en la supervisión de los colegios electorales y Venezuela 2020, organización ocupada de promover grupos de trabajo y mesas redondas sobre la conformación del futuro del país. En otras palabras, no es un partido pero sí algo así como «sociedad civil» (García Guadilla y Silva Querales, 1999; Gómez Calcaño, 1996; Lander, 1995; Levine, 1994 y 1996; Salamanca, 2003).

Sólo se ha extendido el uso en Venezuela del término «sociedad civil» en los últimos diez años. Hasta entonces, los partidos políticos fundados en la década de 1940 y el sistema político consolidado alrededor de éstos después de 1958, encapsularon la expresión de vida social organizada a través de las redes controladas por los partidos. Más contemporánea es la teoría que describe la «emergencia de la sociedad civil» en términos defensivos. El movimiento vecinal comenzó como resultado de descoordinados esfuerzos de las clases medias urbanas para resistir al crecimiento descontrolado de la ciudad y para defender los vecindarios en este contexto. La emergencia de los movimientos por los derechos humanos es diferente. Éstos empezaron a aparecer en la década de 1980, en respuesta a los abusos específicos y desafiando las extensas prácticas de impunidad oficial, especialmente en el caso de la policía¹⁰. Estos movimientos alcanzaron estatura e impacto en el levantamiento del Caracazo, el 27 de febrero de 1989. La violencia creciente durante la década de 1990 los ha mantenido en la luz pública. Lo que estos grupos han tenido en común ha sido el esfuerzo por movilizar la opinión (y la gente) fuera de la red de organizaciones existentes bajo la

10. La representación fue más efectiva cuando hubo distritos plurinominales (1985, 1990), puesto que las circunscripciones uninominales (1992, 1995, 2000) limitan las posibilidades electorales de las élites, dejando de lado los nuevos líderes provenientes de los movimientos recientes.

influencia de los partidos políticos, crisis política creció y los venezolanos poniéndole la culpa a los responsables de los problemas del país, de eslóganes para la reforma y el cambio.

Una vez en el poder, el gobierno retórica participación democrática una serie de provisiones constituyentes que garantizan la participación activa de la «sociedad civil». Así, en la Constitución de 1999, por ejemplo, contempla la posibilidad de «consultar con» la sociedad civil y que la «sociedad civil» designe a los representantes elegidos de la organización de las que aparecen en algún otro sitio del texto. Sin embargo, las disputas sobre la definición de «sociedad civil» y quién podría y quién debería participar en la evaluación de la creciente polarización del país han sido: tanto los grupos contrarios como los partidarios de la «sociedad civil», dentro de la cual los resultados son ocasionalmente ambiguos. La «sociedad civil» participa en la evaluación de la práctica es el presidente el que la mayoría de la población ha votado por la Constitución (Artículos 27-28). Más a menudo últimamente se han enfrentado y letales con grupos enfrentados.

No es fácil determinar de forma concluyente la evidencia estimativa en Venezuela (Salamanca, 2003). Las unidades vecinales, con un número suscetable de población que trabaja con el gobierno, tienen un fuerte, aunque concentrado y no significante, aunque pequeño impacto en los derechos humanos.

No todas las asociaciones civiles. Hay grupos de música, teatro, de grupos relacionados cuya lucha es la movilización y la confrontación política y por lo tanto al Estado, autoritaria. Primero, muchos, si no la principal, en tiempos de crisis económica, es una fuente de financiación y como una

11. Estos grupos incluyen PROVEA (1998) para más detalles.

clases. Segundo, el progresivo incremento del ritmo de la movilización y la polarización desde finales de la década de 1990, se lo ha puesto difícil a los grupos apartados de la división política y de los márgenes de la confrontación. Realmente, el período que va desde 1989 hasta nuestros días es probablemente la etapa con más protestas de los cien últimos años de historia de Venezuela: una gran revuelta urbana, dos intentos de golpe de Estado, la moción de censura de un presidente y la oleada de violencia en las universidades y las calles.

Con las protestas surgidas tras el Caracazo del 27 de febrero de 1989 y después del corto intervalo del segundo gobierno de Rafael Caldera (1993-1998), el ritmo de las manifestaciones, las marchas y las protestas callejeras se acentuó cuando el país comenzó un nuevo ciclo electoral. Seguramente, las protestas urbanas, a veces violentas, nunca desaparecieron del todo: el activismo estudiantil, originado por acciones violentas regulares lideradas por encapuchados, se trasladaban de la universidad a las calles. La protesta y el objetivo de la confrontación se extendieron con la elección de Chávez como presidente. López Maya (2002) muestra que, de todas las clases de protesta, las acciones de confrontación exhibieron su mayor incremento en 1999. Sus figuras no incluyen por supuesto los eventos ocurridos a finales del 2001, cuando las protestas crecieron y las movilizaciones, las manifestaciones y los enfrentamientos se convirtieron en el pan de cada día de la vida urbana, no sólo en la capital Caracas, sino por todo el país: movilización y contramovilización, marchas y contramarchas, enormes manifestaciones siguiéndose unas a las otras, incluso en cortos períodos de tiempo. Las protestas, la ocupación de edificios y las acciones coordinadas, incluyendo cacerolazos y bocinazos, se convirtieron en incidencias cotidianas.

Estos hechos alcanzaron su primera crisis con las sangrientas confrontaciones del 11 al 14 de abril del 2001, cuando unos pistoleros abrieron fuego contra una manifestación que marchaba en Caracas hacia el Palacio Presidencial y el presidente fue destituido de su cargo y repuesto unos días más tarde. Tras un breve respiro, cuando ambas partes dieron un paso atrás justo al límite, las marchas y contramarchas, esta vez por todo el país, comenzaron de nuevo surgiendo una segunda crisis con la huelga que empezó a finales del 2002. No está claro el momento en el que viene la siguiente crisis y cómo es ésta resuelta. Lo que sabemos es que el liderazgo y la columna organizativa de la oposición se recuperó rápidamente, pactando con el movimiento sindical, la federación de empresarios y la Iglesia Católica. Los líderes sindicales, rejuvenecidos tras deponer al gobierno en un referéndum, organizaron el día a día de forma significativa. A éstos se les incorporaron pronto activistas provenientes de partidos políticos, grupos de derechos humanos y otros dándose una coordinación de varias agrupaciones, como por ejemplo la Coordinadora Democrática en el verano del 2002. Para los objetivos presentes, la característica remarcable de este proceso es el papel central jugado por las viejas organizaciones como sindicatos y patronal y cómo los esfuerzos para resolver la protesta fueron restringidos por la debilidad de los líderes de ambos lados y por el predominio de extremistas, libres para actuar dado el absoluto fracaso de una clase política no acostumbrada al compromiso y a la negociación.

V. RELIGIÓN, MOVILIZACIÓN Y E

Un papel comúnmente reconocido en las partes de América del Sur, ha sido el de la dictadura, la asociación y la participación. Los espacios públicos estaban restringidos, las iglesias estaban abiertas para sus fiestas, para difundir información, escuchar a otros y expresar esperanzas. En Perú, este papel lo desempeñó la dictadura entre 1968 y 1980, las iglesias estaban abiertas pese a que las organizaciones políticas se negaban a convivir con las independientes para conservar su propia identidad.

En este contexto, las comunidades cristianas se convierten en un factor para la asociación y la reflexión, y estimular la implicación en otros. Se establece una clara distinción entre el espacio público y la política. Los cristianos comparten la convicción de actuar por su cuenta y no en nombre de los evangelistas. Esta experiencia subvierte la tradición del deramamiento y desempoderamiento de las élites y la representación.

Hasta 1980, el Catolicismo profesional. La Iglesia Católica tuvo expectativas no fueron abandonadas, templado en la Constitución de 1978 contra la pobreza y después en las nuevas áreas de acción común con el Vaticano. También con las agencias internacionales. Antes, en 1988 la Iglesia creó el Programa Social de Emergencia, que unió a empresarios y líderes obreros. Durante todo el período, la Iglesia apoyó y puso su recién ganada legitimidad –monjas y laicos– para cuidar de aquellos inocentes en prisión. Durante el período, el clero y trabajadores católicos se dedicaron a trabajar con los pobres más necesitados, en las comunidades cristianas de base. Estos actividades dieron origen a la Comisión para la Acción Social (CEAS), cuyo Departamento de Derechos Humanos desempeñó un importante papel en el progreso de las principales y más necesitadas áreas del país. CEAS se convirtió en una institución que desempeñó un papel fundamental en la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Durante la campaña del Jubileo convocada por el Papa y a la que se unió el movimiento ecuménico para presionar a favor de la condonación de la deuda externa a los países más pobres, la red de comunidades recogieron la mayor cantidad de firmas entre los países participantes, apoyando el movimiento. La misma red suministró voluntarios para la organización Transparencia en Perú, una ONG cuyo papel era velar por unos procesos electorales justos. Ésta jugó un papel fundamental en las elecciones del 2000, como también en las del 2001.

El «compromiso» se convirtió en una palabra clave para los cristianos en toda la Iglesia Católica en Perú. Esta clase de compromiso a la que nos referimos aquí, tiene que ver más con la participación en general que con la implicación en política específicamente. Una clara distinción es establecida entre la esfera pública política, en la cual se puede participar como ciudadano y la esfera pública social, que ha sido creada mediante el desarrollo y la práctica de la vida organizativa. Esta distinción es acentuada por la experiencia concreta de participación en comunidades y parroquias y en movimientos sociales ajenos a los canales institucionales de representación.

La preferencia por los pobres ha contribuido al crecimiento de la conciencia identitaria ensamblada en el interés común y la cultura, que traspasa diferentes clases y divisiones étnicas e incluso diferentes partidos. Pero esta conciencia religiosa no ha tenido una elaboración intelectual similar en otros campos, como la literatura o la política. La política institucional y la cultura moderna se mantienen distantes de los ciudadanos recientemente incorporados que, a menudo, se sienten marginados o alienados por las agendas públicas. Las demandas para la representación cultural al nivel institucional, el Congreso, el gobierno, el arte y los medios de comunicación, se han añadido a esos intereses económicos. Y los nuevos obispos designados en importantes ciudades como Lima, Arequipa o Trujillo no están ayudando a cubrir el hueco ni a acercar las élites con la ciudadanía.

VI. DESEMPoderAMIENTO COMO EL FUTURO DEL EMPODERAMIENTO

La combinación de una movilización ciudadana realmente activa y el desempoderamiento une las trayectorias políticas y sociales de Venezuela y Perú en una inesperada convergencia. Desde puntos de partida diferentes y con una gran disparidad en términos de tradición social, política y organizativa estas dos naciones han llegado a compartir un espacio que no augura buena fortuna para la representación y el empoderamiento de los ciudadanos. El hundimiento de las instituciones políticas, incluyendo pero no limitándose a los partidos políticos, ha dejado a los venezolanos y peruanos espacios para la creación de «sociedad civil» –un espacio que ellos han ocupado, como hemos visto, con gran creatividad y energía–. Pero dada la ausencia de intermediarios políticos confiables y leales, tanto instituciones formales como partidos políticos, estas energías se han convertido raramente en una representación sostenida y auténtica. ¿Es el desempoderamiento el futuro del empoderamiento? Mirar atrás a las recientes olas de movilizaciones masivas, principalmente urbanas, en cada uno de

los países (anti-Fujimori en Perú) algunas pistas.

Se puede argumentar que el sistema de corrupción Fujimori-Tomando una mayor perspectiva incierta en Perú: aunque el régimen democráticos y autoritarios nificado que los ciudadanos peruanos se seguros de si las elecciones se va a aplicar. Las formas de «cívicas», empiezan a tomar una contra Sendero Luminoso y el MRT, dando más como un movimiento que han conquistado derechos civiles en el político, en la lucha por la justicia. Los derechos individuales han sido puesto por Marshall. Con fuertes derechos humanos, los activistas políticos pronto gozaron de alcance internacional de que veinte años de activismo ha llevado a un movimiento social, tanto que son ahorita «sociedad civil», estas organizaciones que generan una militancia de base.

El final del régimen autoritario Estado de Derecho no han retirado demostrado por la creación de la veinte años. Los grupos por los derechos para incluir derechos sociales los derechos humanos. Asimismo, la atención específica a la transición de Fujimori y la reconstrucción de otros grupos explícitamente demócratas opuestos a la reelección de Fujimori rechazó los esfuerzos de éste y la propia reelección. Estas luchas fueron (Mujeres por la Democracia), que se reunieron en grupos como Resistencia, de protesta importadas de otros países en la Plaza Mayor de Lima, en la ción de los «Muros de la Vergüenza», pegar sus ideas, fotos, dibujos o carteles, marchas y manifestaciones que se unieron bajo la dirección de

manifestación «Marcha de los Cuatro Suyos» celebrada el mismo día en el que Fujimori juraba su tercer y efímero tercer mandato.

Hasta este punto, el esfuerzo para reconstruir las instituciones democráticas en Perú ha puesto el énfasis más en las instituciones que en los actores o los recursos. El nuevo límite de la lucha urbana y de la movilización está teniendo lugar fuera de la capital Lima. En Iquitos, el Frente Regional, fortalecido durante las negociaciones llevadas a cabo por Fujimori con Ecuador para el establecimiento de las fronteras, está empezando a reclamar recursos para el desarrollo y demandando que los beneficios sean para los peruanos en vez de para los ecuatorianos. También hay activos frentes regionales en Tacna, en la frontera con Chile y en Puno y Madre de Dios, en la frontera con Bolivia. Básicamente, estos movimientos no son de corte urbano porque incluyen campesinos, pero son organizados primero en las ciudades de provincia por gente de los negocios y académicos procedentes de las universidades locales y por cargos locales. El proceso de descentralización recientemente iniciado con las elecciones regionales de noviembre del 2002, dará un dinamismo añadido y recursos a esas organizaciones y abre en este camino espacios para la emergencia de nuevos grupos y líderes.

En Venezuela, los nuevos movimientos ciudadanos y formas de protesta, idea real de la «sociedad civil» como un espacio autónomo para la acción y la organización, aparecen en la democracia ya establecida. Sus objetivos no fueron retar o abolir el régimen autoritario, sino ampliar o profundizar esa democracia desatándose de los límites impuestos por unas agonizantes instituciones y reglas tácitas centradas en los partidos, pero que todavía controlaban todo. El recorrido histórico es diferente al peruano pero el resultado es sorprendentemente similar. La creación de un movimiento alrededor de Chávez, su llegada al poder y la implementación de la Revolución bolivariana extrajo fortaleza del descrédito del viejo sistema y la asociación implícita del movimiento con la «sociedad civil», al menos en términos retóricos. Todo el proceso se dota de sentido como parte de la ofensiva al viejo sistema, a sus instituciones y a sus reglas operativas. Como Komblith (1999) muestra en diversas publicaciones, el término «representativo» aparece raramente en la Constitución bolivariana de 1999. Por el contrario, la democracia venezolana es «y siempre será democrática, participativa, electa, descentralizada, alternativa, responsable, pluralista y de mandatos revocables» (art. 6). Los resultados han sido insuficientes. Las nuevas instituciones nunca o casi nunca han seguido lo establecido en la ruta.

En ambos países, el estancamiento político y el escarpado declive económico, seguidos de una aparente euforia (resignación de Fujimori, elección de Toledo; victoria de Chávez, su caída y reposición, la aparición de una oposición y la escalada de violencia), se combinaron para hacer más duro el mantenimiento de activismo para la gente ordinaria. Es muy pronto para calcular los costes de la gran huelga en Venezuela pero son fáciles de imaginar los costes para los individuos, los negocios, los movimientos y las cuentas nacionales. A pesar de que el desplome de los partidos dejó libres a grupos en los dos países, en la misma medida los dejó perdidos y a la merced de una supuesta relación directa con el líder, quien quiera que éste fuese. No es probable que la «sociedad civil» que se construyó en este sentido genere una organización permanente, pero

sí demasiado posible que acabe con personalistas tan fuera de su controlización fuerte y duradera la «sociedad civil» y dirección a una sociedad compuesta.

El puzzle de la movilización y de la dificultad es práctica: obstáculos que lo intentan. También hay un cambio sobre empoderamiento, entre la reflexión sobre movimientos que ampliar el acceso ciudadano a la política en cómo dotar de fortaleza y participación. Esto está empezando a ocurrir contra la Pobreza, establecidas. Ha habido también un Acuerdo entre los frentes regionales y las Mesas de la Verdad. Todo esto puede ser en los espacios políticos existentes, institucionales. A pesar de las disposiciones de referéndum y otros tipos de fórum para la paz en Venezuela. En cualquier caso, los países han intensificado la fragmentación del acuerdo en esos espacios (principalmente poco probable. Como adelantábamos en 1990 se han interrumpido y algunos factores electorales) han agravado los problemas.

El futuro de los movimientos es difícil ser optimista, al menos no a corto plazo. El principal problema. No es algo nuevo, es algo que se ha visto de fiar o manipulable. La dificultad es la fragmentación democrática en y mediante la descentralización como tal cómo en la creación de espacios donde se puedan apoyar los grupos. El juego, en toda América Latina y en el mundo, ha implicado un ayer y un mañana, y ahora está empezando en Venezuela. La pregunta es que los miembros de los grupos de la sociedad civil urbana han cambiado. Las demandas de tierra, agua, vivienda, transporte, educación, pero ahora, y en un predecible futuro, los grupos en las ciudades están condicionados por arenas políticas no sólo para la protesta, como sitios para las formas clásicas de protesta, sino para las conexiones viables con otros niveles de la sociedad.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ, Ángel. Venezuelan Local and National Elections, 1958-1995. En DIETZ, Henry y SHIDLO, Gil (eds.). *Urban Democratic Elections in Latin America*. Wilmington D.E.: SR Books, 1998, pp. 239-274.
- BARDÁLEZ, Elsa. La ciudadanía: libertad, igualdad, diversidad? En BARDÁLEZ, Elsa; TANAKA, Martín y ZAPATA, Antonio (eds.). *Repensando la política en el Perú*. Lima: Red Para el Desarrollo de las CC. SS., 1999, pp. 245-300.
- BLANCO MUÑOZ, Agustín. *Venezuela del 04 F-92 al 06 D-98. Habla el comandante Hugo Chávez Frías*. Caracas: Cátedra Pío Tamayo, CEHA/IIES/FACES/UCV, 1998.
- BLONDET, Cecilia. *Las Mujeres y el Poder. Una historia de Villa el Salvador*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1991.
- BURGERMAN, Susan. *Moral Victories. How Activists Provoke Multilateral Action*. Ithaca: Cornell University Press, 2001.
- CABALLERO, Manuel. *Las Venezuelas del siglo veinte*. Caracas: Grijalbo, 1998.
- CALHOUN, Craig. New Social Movements of the Early XIX century. En TRAUGOTT, Mark (ed.). *Repertoires and Cycles of Collective Action*. London: Duke University Press, 1995.
- CASTAÑEDA, Jorge. *Utopia unarmed: the Latin American left After the Cold War*. New York: Knopf, 1993.
- CONAGHAN, Catherine. *Democracy that Matters: The Search for Authenticity, Legitimacy, and Civic Competence in the Andes*. Project Latin America 2000: Series Working Paper nº 1, 1994.
- COPPEDGE, Michael. Soberanía popular versus democracia liberal en Venezuela. En RAMOS ROLLÓN, Marisa (ed.). *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001)*. Salamanca, España: Ediciones Universidad, 2002, pp. 69-96.
- COTLER, Julio y GRAMPONE, Romeo. *El Fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario*. Lima: IEP, 2000.
- CRISP, Brian. *Democratic Institutional Design. The Powers and Incentives of Venezuelan Politicians and Interest Groups*. Stanford: University Press, 2000.
- DIETZ, Henry. *Urban Poverty, Political Participation and the State, Lima 1970-1990*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1998.
- DROGUS, Carol Ann. *Women, Religion and Social Change in Brazil's Popular Church*. Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, 1997.
- DRZEWIENIECKI, Joanna. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: Un estudio de caso. *Cuadernos de investigación social*, 2001, nº 17.
- ECKSTEIN, Susan. *Power and Popular Protest. Latin American Social Movements*. Berkeley: University of California Press, 1989.
- ELLNER, Stephen. Recent Venezuelan Studies. A Return to Third World Realities: Review Article. *Latin American Research Review*, 1997, vol. 32, nº 2, pp. 201-218.
- ESCOBAR, Arturo y ÁLVAREZ, Sonia. *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy, and Democracy*. Boulder: Westview Press, 1992.
- FOX, Jonathan. How Does Civil Society Thicken? The Political Construction of Social Capital in Rural Mexico. *World Development*, 1996, vol. 24, nº 6, pp. 1089-1103.
- GARCÍA GUADILLA, María y SILVA QUERALES, Nadeska. De los movimientos sociales a las redes organizacionales en Venezuela; estrategias, valores e identidades. *Politeia*, 1999, nº 23, pp. 7-27.
- GARRETÓN, Manuel Antonio. Popular Mobilization and the Military Regime in Chile: The Complexities of the Invisible Transition. En ECKSTEIN, Silke (ed.). *Power and Popular Protest Latin American Social Movements*. Berkeley: University of California Press, 1989, pp. 259-277.

- GÓMEZ CALCAÑO, Luis. Civic Organization in Venezuela. En CANACHE, Daniel. *Democracy and Political Change in Venezuela*. 186.
- GRANOVETTER, Mark. The Strength of Weak Ties. *American Sociological Review*, 1973, vol. 48, pp. 1360-1380.
- HELLMAN, Judith Adler. The Study of Autonomy. En ESCOBAR, Arturo (ed.). *Latin America: Identity, Strategy, and Democracy*. 1994.
- HERNÁNDEZ, Tosca. El desafío de la violencia. *Politeia*, 1999, nº 22, pp. 1-22.
- ROLLÓN, Marisa (ed.). *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001)*. Salamanca, España: Ediciones Universidad, 2002.
- JELIN, Elizabeth. La construcción de la memoria. *Politeia*, 1999, nº 22, pp. 23-40.
- JELIN, Elizabeth y HERSHBERG, Linda. *Memory, Truth and Justice in Argentina and Chile*. Salamanca, España: Ediciones Universidad, 2002.
- KORNBLITH, Miriam. Agenda de reformas. *Politeia*, 1999, nº 22, pp. 41-56.
- KYMLICKA, Will. *Multicultural Citizenship*. Oxford: Clarendon Press, 1995.
- LANDER, Edgardo. *Neoliberalismo, socialismo y capitalismo en Venezuela*. Caracas: Universidad Central de Venezuela y Humanístico, 1995.
- LEVINE, Daniel. El consenso democrático. *Politeia*, 1999, nº 22, pp. 57-74.
- The Decline and Fall of Democracy in Venezuela. *Latin American Research Review*, 2002, vol. 21, nº 2, pp. 145-182.
- Beyond the Exhaustion of the Model. En CANACHE, Daniel y KULISH, Daniel. *Democracy and Political Change in Venezuela*. 2002.
- Goodbye to Venezuelan Exceptionalism. *Latin American Research Review*, 1994, vol. 36, nº 4, pp. 145-182.
- *Popular Voices in Latin America: The Politics of Social Movements*. 1999.
- *Conflict and Political Change in Latin America*. 2002.
- LEVINE, Daniel y CRISP, Brian. Democracy and Social Movements in Latin America. *Journal of Inter American Studies*, 1999, vol. 31, nº 2, pp. 145-182.
- Venezuela: the Character, Crisis and Future of Democracy. En HARTLYN, Jonathan; LINZ, Juan (eds.). *Democracy in Latin America*. 2ª edición. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- LEVINE, Daniel y KORNBLITH, Miriam. *Neoliberalism and Democracy in Latin America*. 2002.
- MAINWARING, Scott y SCULLY, Thomas. *Party Systems in Latin America*. 1997.
- LEVINE, Daniel y STOLL, David. *Brick by Brick: The Decline of Democracy in Latin America*. En HOEBER RUDOLPH, David y STOLL, David. *Brick by Brick: The Decline of Democracy in Latin America*. Boulder: Westview Press, 1997.

- LIPSET, Seymour. The Social Requirements of Democracy Revisited. *American Political Science Review*, 1994, vol. 59, n°1.
- LÓPEZ JIMÉNEZ, Sinesio. *Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú*. Lima: Instituto de Diálogo y Propuestas, 1997.
- LÓPEZ MAYA, Margarita. Venezuela after the Caracazo: Forms of Protest in a Deinstitutionalized Context. *Bulletin of Latin American Research*, 2002, vol. 21, n° 2, pp. 199-218.
- LORA, Carmen. Sobre lo siniestro en el movimiento de mujeres. *Páginas*, 2002, n° 173.
- MAINWARING, Scott y SCULLY, Timothy. *Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America*. Stanford: Stanford University Press, 1995.
- MATOS MAR, José. *Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980*. Lima: IEP, 1984.
- MELUCCI, Alberto. *Nomads of the Present Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society*. Philadelphia: Temple University Press, 1988.
- MOLINA, José Enrique. The Presidential and Parliamentary Elections of the Bolivarian Revolution in Venezuela: Change and Continuity (1998-2000). *Bulletin of Latin American Research*, 2002, vol. 21, n° 2, pp. 219-247.
- Electoral System and Democratic Legitimacy in Venezuela. En CANACHE, Damarys y KULISHEK, Michael (eds.). *Reinventing Legitimacy: Democracy and Political Change in Venezuela*. Westport: Greenwood Press, 1996.
- MOLINA, José Enrique y PÉREZ, Carmen. Venezuela ratifica el cambio: elecciones de 2000. En RAMOS ROLLÓN, Marisa (ed.). *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001)*. Salamanca, España: Ediciones Universidad, 2002, pp. 143-176.
- ORTNER, Sherry. Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal. *Comparative Studies in Society and History*, 1995, vol. 37, n° 1, pp. 173-193.
- OXHORN, Phillip. *When Democracy Isn't All That Democratic: Social Exclusion and the Limits of the Public Sphere in Latin America*. Miami: North South Center, 2001.
- Understanding Political Change After Authoritarian Rule: The Popular Sectors and Chile's New Democratic Regime. *Journal of Latin American Studies*, 1994, vol. 26, n° 3.
- PÁSARA, Luis; DELPINO, Nerna; VALDEAVELLANO, Rocío y ZARZAR, Alfonso. *La otra cara de la luna: nuevos actores sociales en el Perú*. Lima: CEDYS, 1991.
- PIVEN, Frances Fox y CLOWARD, Richard. *The Breaking of the American Social Compact*. N.Y.: The New Press, 1998 (especialmente Part IV Disruptive Movements and their Electoral Impact #17 «Normalizing Collective Protest», pp. 345-374).
- *Poor Peoples' Movements. Why they Succeed. How They Fail*. New York: Vintage, 1977.
- PLANAS, Planas. La difícil integración de la ciudadanía en el Perú. En BARDÁEZ, Elsa; TANAKA, Martín y ZAPATA, Antonio (eds.). *Repensando la política en el Perú*. Lima: Red para el Desarrollo de las CC. SS., 1999, pp. 327-363.
- PROVEA. Situación de los derechos humanos en Venezuela. *Boletín de derechos humanos y coyuntura*, varios años.
- PRZEWORSKI, Adam. Some Problems in the Study of the Transition to Democracy. En SCHMITTER, Phillip; WHITEHEAD, Lawrence y O'DONNELL, Guillermo (eds.). *Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives*. Baltimore, Md.: John Hopkins University Press, 1986.
- RAMOS JIMÉNEZ, Alfredo. *La transición venezolana. Aproximación al fenómeno Chávez*. Mérida: Centro de Investigaciones de Política Comparada, 2002.
- REY, Juan Carlos. La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación. *Revista de Estudios Políticos*, 1991, vol. 74, pp. 553-578.
- REY, Juan Carlos y PABÓN, Jorge. *Los movimientos urbanos en la Constitución de 1999*. SIC, ROMERO, Aníbal. *Rearranging the Latin American City: Venezuela*. *Latin American Research Review*, 2003 (en preparación).
- SANTANA, Elías. *El poder de los vecinos*. Cambridge: University Press, 1992.
- SIKKINK, Kathryn. *Human Rights, Privililege, and International Organization*, 1991.
- SMITH, Christian. *Resisting Reagan. The Moral Argument of Chicago*. Chicago: University Press, 1996.
- STOKES, Susan. *Cultures in Conflict. Society and Politics in California*. Berkeley: University Press, 1995.
- TANAKA, Martín. *Los espejismos de la democracia 1980-1995, en perspectiva comparada*. Cambridge: University Press, 1996.
- TARROW, Sidney. *Power in Movement. A Political History of the 1970s*. Cambridge: University Press, 1998.
- TOVAR, Teresa. *El discreto desencanto de la democracia*. Madrid: Taurus, 1995.
- TRAUGOTT, Mark. *Repertoires and Change*. Cambridge: University Press, 1995.
- WARNER, Stephen. *Work in Progress. Religion in the United States*. A. Cambridge: University Press, 1993.
- VELÁSQUEZ, Ramón. *Interrogantes sobre la democracia*. Madrid: Consorcio de Ediciones Capri, 1995.
- ZAGO, Ángela. *La rebelión de los ángeles*. Madrid: Taurus, 1995.